



El Aromo

UNA PUBLICACIÓN DE VÍA SOCIALISTA

Peligro de extinción



Una esperanza para el 2023...



Fabián Harari
Editor Responsable

El año que acaba de pasar mostró dos paradojas muy curiosas. La primera es que, a pesar de haber sido el primero de Alberto sin pandemia, fue en el que más peligró su continuidad. El 2022 no vino con esa andanada de muertos, ni de cierres obligados, ni con negligencias en torno a las vacunas. Mas aún, se esperaba sufrir algún “rebote” económico importante. Sin embargo, el desbarranque y la crisis interna desembocaron en un escenario que tocó a las puertas del infierno a mitad de año.



La segunda es que se salvó al gobierno de Alberto, pero quitándolo del medio. Hoy gobierna Massa, con el apoyo de Cristina. Y si el presidente dejó sus funciones, el peronismo está salvando (por ahora) su virginidad. No la de no producir un descalabro económico y un rechazo social, sino la de no ser expulsado por eso.

El caso del fallo cautelar de la Corte Suprema por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires es muy sintomático en ese sentido. Fue Cristina quien le ordenó a Alberto anunciar que no lo iba a cumplir. Pero, con ello, comprometía el plan de Massa, a pocos días del canje de deuda en pesos. Entre ambos, pactaron una solución provisoria e intermedia: anunciar el pago, pero en bonos (otra dilación inútil). En una nueva jugada, ella fustigó al presidente (“amague y recule”) y llamó a Capitanich para poner en marcha el juicio político a Rosatti...

El episodio, decimos, es ejemplar, porque demuestra varias cosas. En primer lugar, que Alberto no es más el presidente. El gobierno está a cargo de un acuerdo entre Massa y Cristina. El la necesita a ella para gobernar, ella a él para que el gobierno no caiga y la oposición a ambos para no recibir la bomba antes de tiempo.

En segundo, que acá no se juega ni el federalismo ni el bienestar de nadie, sino plata para las campañas. Esa plata en disputa no era de, ni para, las provincias. Es dinero que la Nación le sacó a CABA para pagar sueldos de la policía bonaerense ante una huelga de los uniformados. En realidad, en términos estrictos, la posición de Nación perjudica a los gobernadores, porque crea un antecedente de alteración del coeficiente de coparticipación secundaria a su antojo. De hecho, la Corte falló en favor de San Luis y Santa Fe bajo el mandato de Macri y, en ese momento, el kirchnerismo festejó. La avanzada de Cristina no solo es para sacarle plata a Larreta en favor de Kicillof, sino para amenazar a los jueces que tienen que fallar sobre sus causas de corrupción. En esas cuestiones tan mezquinas embarca a todos sus seguidores y aliados.

En tercero, muestra Cristina no carece de poder político y territorial, pero que no le alcanza: Capitanich, en su nombre, logró convocar a una decena de gobernadores, pero solo eso. Once, nada más. No acompañaron Bordet, Perotti ni los Rodríguez Saá, por poner algunos casos de gobernadores peronistas. Además, no va a poder conseguir los números que necesita en el parlamento, así que todas esas reuniones y fotos no son más que un circo. Ella no está acabada, queda claro, pero hoy no puede dirigir al peronismo y, simplemente, cuenta con la suerte de tener a un presidente que hace el ridículo por ella.

El consenso liberal ya está operando, aunque más no sea en forma provisional. Este año asistimos a un ajuste brutal: una inflación que roza el 100% y una reducción del déficit fiscal de 2,44, unas décimas más de lo que se pactó con el FMI. Rubinstein fue entrevistado por la revista *Newsweek*, donde dejó en claro el programa de unificación del tipo de cambio, de déficit cero y de reformas económicas que necesita “el mercado”.

Sumá tu apoyo

Vía Socialista es un partido con una propuesta concreta de gobierno para llevar adelante y que es resultado de muchos años de trabajo. Se llama Argentina 2050. Con este programa aspiramos a un país que vuelva a crecer y alcance una productividad coreana y un nivel de vida sueco.

No buscamos una candidatura testimonial de oposición ni queremos apenas instalar un legislador o una figurita pública. Por el contrario, consideramos que podemos gobernar y llevar adelante un programa socialista que desarrolle el país. Así, planteamos que el socialismo es posible, ahora.

Para llevar esta propuesta a las próximas elecciones, necesitamos conseguir la legalidad como partido. Para eso necesitamos, sobre todo, afiliaciones. Podés hacerlo directamente online en el siguiente link:

<https://viasocialista.com.ar/afiliacion/>

Podés descargar gratuitamente nuestro programa Argentina 2050: <https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR2FelKZ0u-V0Db34x8uSkMO4SsT-L9oUkUNmrjXSAWDz-TKXTneIoOeK8UQIc>

El Aromo

Nueva Epoca. Año I, nº 8. Enero 2023.

Buenos Aires. ISSN: 1851-1813.

Editor Responsable: Fabián Harari.

Diseño de interior: Luciano Martin.

Diseño de Imagen: Leandro Albin.

Equipo Editorial: Eduardo Sartelli, Marina Kabat, Romina De Luca, Rosana López Rodríguez, Ianina Harari, Nicolás Villanova, Mariana Fennema, María del Rosario Toro Tesini, Ezequiel Flores, Guido Lissandrello, Gonzalo Sanz Cerbino, Hernán Calisaya, Dolores Martínez González, Damián Bil, Roberto Muñoz, Nicolás Grimaldi, Martín Pezzarini.

Redacción: Salcedo 2654, CABA, CP: 1259.

Contacto: argentinasocialista2050@gmail.com

El empresariado responde apoyando (recomiendo la última entrevista en LN+ a Augusto Darguet, un peso pesado de la Bolsa de Comercio). La incorporación de Antonio Aracre, CEO de Sygenta, como asesor principal, muestra esta comunión o, si se quiere, una “luna de miel”. Cristina apoya y acompaña. Puede prepararse para disputar el liderazgo del peronismo con Massa, pero de su boca no salió una sola crítica al programa económico. De hecho, Wado de Pedro secundó a Sergio en cada uno de sus movimientos. La oposición está imbuida del mismo espíritu que Cristina. No se escuchan críticas importantes al plan de Massa y Larreta se “peroniza” con Redrado. El futuro ministro de Economía, Melconian, pondera los aciertos de Sergio cada vez que puede. No se puede decir, entonces, que el problema de la Argentina sea la grieta. Con oficialismo y oposición unificados sobre cierto consenso, asistimos al año con mayor índice de pobreza, inflación y desempleo.

¿Cuáles fueron las bases del Plan Massa para evitar la espiralización de la crisis? Dos, la bicicleta y la gorra. La bicicleta: se pedalea cuando se baja la tasa de las Leligs, pero se aumentó el stock. Se pedalea, también, cuando se incrementan los pasivos pasivos del BCRA para “secar” la plaza de pesos, pero se emiten bonos que deben comprar los bancos públicos, reduciendo su posición en esos mismos pasivos. Ergo, se reemplaza la emisión, pero se va acelerando la velocidad del circulante, mientras el Estado se transforma en el principal acreedor de su propia deuda. Y, por último, un pedaleo que combina con las otras dos: la inflación para licuar el gasto estatal. Son estrategias de cortísimo plazo que dan un respiro en lo inmediato, a medida que se renuevan, pero van aumentando la temperatura de la olla a presión.

La gorra, en realidad, se divide en dos: la local y la externa. La local es la desaparición del dólar oficial bajo la forma de Soja 1, Soja 2, Qatar, etc. para que se liquiden los dólares, incluso adelantando impuestos. La otra, la gorra externa, es la más importante de todas, y no podría pasarla otro que no sea Sergio: es la que recauda de cuanto organismo internacional o estado haya. Y si no hay plata, hay refinanciamiento de deuda. Y si no, perdón financiero y silencio ante el descalabro. Con esto, le alcanzó para terminar el año y poner al país de cara a una campaña electoral. ¿Le alcanzará para llegar a octubre? Tiene el apoyo político, sí. Pero un pronóstico a diez meses, en una situación tan precaria, es una osadía.

Y sin embargo, todas las fuerzas políticas están pensando en el candidato para ese horizonte: Massa y Larreta pican en punta. Con la receta liberal en la mano y la discusión sobre la candidatura que mejor mide, la burguesía argentina muestra una asombrosa superficialidad en su análisis. Es cierto, tienen un problema: el consenso liberal no se vende solo. Ni siquiera en 1989. Hace falta algún personaje que no solo sepa mentir, sino que pueda corporizar esa mentira. Cristina puede, en ese sentido, ser indispensable, como Kicillof (que no quiere salir de la provincia) o Wado (que supo tejer sólidos lazos con la embajada de EE.UU. e Israel y da con la imagen de moderado, pero por ahora no mide). No habría que descartar a Milei, cuya prédica filofascista no se priva de ponderar a los planes sociales y a la “economía popular”. Sin embargo, el problema es más profundo: el asunto no es tanto como imponerse en una elección, sino como van a hacer para gobernar un país quebrado, con un hartazgo social ante el ajuste, un ajuste más brutal aun por delante y sin mayorías parlamentarias ni política. Esto, gane quien gane. Esta confusión entre victoria electoral y hegemonía política es una de las lecciones indelebles que no deja de atormentar a Cristina.

Las claves

Para comprender las discusiones en torno a la crisis en Argentina, hay que distinguir entre dos fenómenos: el bonapartismo y el ajuste. El primero es un régimen político. Un ordenamiento particular de la dominación política basada en ciertas relaciones entre las clases sociales. En un período de cierto equilibrio o persistencia de ciertas posiciones de la clase obrera. Para recuperar poder y no perder el control de la situación, los gobiernos tienen que apelar a mecanismos poco ortodoxos, a relaciones directas, que acrecienten el poder ejecutivo para intervenir en forma mucho más “flexible”: organizaciones para estatales que cumplen diversas funciones (Movimiento Evita, Grabois, La Cántora, Madres, patotas, etc.), avasallamiento de otros poderes y de autonomías distritales. Por motivos que ahora no vale la pena recordar, todo esto es costoso para la burguesía y solo se consiente mientras sea estrictamente necesario.

Muchas veces, se suele asociar estos regímenes con políticas reformistas y con el peronismo, pero eso no es necesariamente así. Primero, un gobierno en un régimen bonapartista puede ajustar en forma ortodoxa o heterodoxa. De hecho, estamos asistiendo a uno de los mayores ajustes de las últimas décadas. Segundo, no depende de que el gobierno sea peronista. Macri subió y no desarmó el bonapartismo. Que el Movimiento Evita se haya enfrentado a Cristina hasta hoy es una muestra de que ella no monopoliza el puesto. El hecho de que Larreta, socio de Grabois y Santamaría, sea un candidato firme, refuerza esa misma línea.

Obviamente, cualquier contenido no entra en cualquier forma. Primero, porque no cualquiera puede ocupar el lugar del Bonaparte. Segundo, porque es evidente que la plena hegemonía, que aparece en la vigencia de la “república”, es la condición óptima para un ataque a las masas en toda la regla, toda vez que el lazo de estas con el Estado es más indirecto, más institucional, y los gobiernos dependen menos de esos líderes “plebeyos” para el control social. Pero hoy esa situación es difícil, dado el vínculo roto con la clase obrera. Por eso, el consenso liberal también incluye un paréntesis en la normalización republicana, lo que, paradójicamente, prolonga la crisis de la política burguesa. No es cierto que no esté pasando nada a nivel de las masas. Quiénes alegan ese tipo de derrotismos, confunden rechazo con apatía. Si bien no se puede hacer una división tan tajante, son dos cosas distintas. La apatía implica indiferencia y distanciamiento, el rechazo es el resultado de una evaluación negativa, un involucramiento y una predisposición al enfrentamiento. La aparente “apatía” electoral expresa un rechazo a la política burguesa y a su fracaso. Que no es apatía se muestra en el crecimiento de personajes como Milei. Ese rechazo es el que se vio en la recepción a la Selección: por primera vez en la historia de los mundiales, la política no puede recibir a los campeones del mundo. No fue por la interna entre Tapia, La Cántora, Alberto y Larreta. Fue el repudio y la repugnancia de esas cinco millones de personas a la aparición de las autoridades (y de cualquier político) que condicionó cualquier decisión. En lugar de quejarse, Alberto y Cristina deberían estar agradecidos: se evitó que cinco millones de personas los silben... El fantasma del “que se vayan todos” sobrevoló latente y en silencio.

El rechazo es el producto de una desilusión: los partidos, las instituciones, el peronismo, las promesas de reconstrucción post 2001... Desilusionarse es doloroso, pero está bien. A nadie le gusta vivir de ilusiones. El 2023 presenta un escenario difícil, pero muy propicio para el desarrollo de una política revolucionaria: una clase que ha quebrado a un país y que debe emprender un ataque todavía más crudo a su población, con un gobierno débil y en medio de un repudio generalizado. La llave de todo el asunto la dijo el propio Melconian: toda la cuestión es saber para qué se va a hacer un ajuste. Es así, no pueden prometer nada. Ni ellos saben que habrá luego de la sangre, el sudor y las lágrimas. Vía Socialista sí. Vía Socialista puede explicar cómo, por qué, para qué y en qué lapsos Argentina se va a convertir en un país en el que valga la pena vivir, sin desocupación ni pobreza. Un programa realista y transformador es la única fórmula de convertir la desilusión en esperanza. Es decir, en una mirada realista sobre la posibilidad del cambio, a condición de intervenir. En este número, ofrecemos nuevos adelantos para alimentarla.

¿Cómo financiamos la Desocupación Cero y el fin de los planes sociales?



Nicolás Villanova
Via Socialista



En Argentina hay 1,2 millones de desocupados que perciben el Potenciar Trabajo y mínimamente hay otro millón más que no tiene plan y que, eventualmente, hace changas para sobrevivir. Todo el arco oficial y opositor acuerda con que a los planes sociales habría que eliminarlos, con traspaso paulatino al sector privado y con ayuda del Estado, a través de exenciones impositivas a las empresas que contraten a los beneficiarios de planes. Situación que de ningún modo resolvería el problema del resto de las personas que carecen de plan y no tienen empleo fijo. También hay acuerdo en “achicar” el Estado, por la vía de la reducción del gasto social, para evitar mayores déficits fiscales. De este modo, el consenso liberal avanza por el lado de JxC y Milei, pero también desde el campo “nacional y popular”. Mientras que Milei y Espert lo exponen abiertamente, el gobierno de Cristina y Alberto comienza a ejecutarlo con mayor o menor gradualismo. Esto se manifiesta en el ajuste contra la clase obrera, a través de la reducción de la capacidad adquisitiva del salario por efecto de la inflación y la quita de subsidios a las tarifas, entre otras medidas. En materia de gasto social, el ajuste se expresa además en las limitaciones al cupo de empleados estatales del sector público nacional, así como también el freno a nuevos planes Potenciar Trabajo. Este último se encuentra hoy en el ojo de la tormenta.

Desde su nacimiento, bajo el nombre de Plan Argentina Trabaja, hasta el actual Potenciar Trabajo, la cantidad de cupos del programa de empleo aumentó, pero el poder adquisitivo del ingreso se redujo considerablemente. Ahora, el ajuste pasa por el freno a la cantidad de nuevos cupos. Además, se puso sobre la mesa la idea de eliminar la indexación de los planes de empleo respecto del valor del salario mínimo, vital y móvil, cuya consecuencia obvia será un ajuste mayor. Recordemos que el haber que se paga por el programa de empleo representa el 50% del salario mínimo. Cada vez que éste aumenta por decreto repercute en un incremento automático de aquél.

Aunque la quita y ajuste es sustantivamente mayor, el gobierno otorga algunas dádivas, las cuales no resuelven el problema de fondo. Hay en marcha algunos bonos extraordinarios y promesas de futuras partidas presupuestarias dirigidas a las organizaciones y cooperativas de desocupados, sobre todo para garantizar un “diciembre pacífico”, o sea, sin saqueos, y un intento por mantener alguna base social de cara a las elecciones presidenciales de 2023. En efecto, el Frente de Todos lanzó el bono de 45.000 pesos (o IFE-5) a modo de “refuerzo alimentario”, a pagar en dos cuotas de 22.500 pesos cada una en noviembre y en diciembre, a personas de 18 a 65 años que no sean perceptores de planes. Al mes de noviembre de este año, se habían inscripto según ANSES unas 1.019.956 personas. A su vez, el gobierno ya prometió la entrega de partidas presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas dirigidas a cooperativas que perciben el Potenciar Trabajo. Específicamente, el 30% del presupuesto de las obras públicas de hasta 300 millones de pesos.

Pero ¿es acaso la manera de sacar el país adelante? ¿Con ajuste y esperando a que la burguesía invierta y desarrolle una economía productiva contratando a desocupados perceptores de planes? Si no lo hizo hasta ahora, ¿por qué vamos a pensar que es factible que lo haga? ¿Puede la misma burguesía que ha venido hundiendo al país sacarlo adelante? Definitivamente, no. La única manera de resolver el problema del desempleo es agrandando al Estado, es decir, empleando a todos los desocupados en actividades productivas, tarea que sólo es posible sobre la base de la planificación de la economía.

La pregunta que surge es obvia: ¿de qué modo se financia el empleo de todos los desocupados? En este artículo mostramos algunos números acerca de cuál es el presupuesto que ya va dirigido a los desocupados y cuál es el presupuesto faltante para garantizar un sueldo al obrero desocupado empleado por el Estado en tareas productivas equivalente a la canasta de pobreza. Sueldo que no sería óptimo ni muy elevado, pero que sin duda redundaría en una mejora en la calidad de vida de la población en el corto plazo, sobre todo considerando que hoy muchos asalariados del sector registrado perciben salarios por debajo de la canasta de pobreza y que la gran mayoría de los asalariados no registrados obtienen ingresos muy por debajo de esos valores. Como veremos, no es mucho lo que falta, sólo es cuestión de planificar y organizar la economía sobre nuevas bases sociales.

Lo que ya se paga a los desocupados

Saber la cantidad exacta de desocupados resulta una tarea compleja debido a la inconsistencia de las estadísticas burguesas. Por ello, y con las salvedades del caso, elaboramos dos cuentas para conocer cuál es el financiamiento dirigido hoy a los desocupados y cuál es el presupuesto que hace falta para contratar a todos los desempleados en un Estado productivo con un sueldo equivalente a la canasta de pobreza. Cabe destacar que todas las cuentas fueron elaboradas en base a los datos del año 2021. Se trata de una aproximación que permite trazar un horizonte. La “opción 1” supone la existencia de 3.267.723 personas desocupadas; mientras que, la “opción 2” registra a 2.231.554 de desempleados. En ambos casos se incorpora a: desocupados abiertos sin planes sociales, desocupados perceptores de planes y beneficiarios del Seguro por Desempleo.

El Estado, a través de la ANSES y sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social, destina un presupuesto a la masa de desocupados. No todas estas partidas van dirigidas a las mismas personas. Pero, si las tomamos en conjunto y las dividimos por el total de los desocupados, el resultado nos presenta un estado de situación para pensar una estrategia de empleo productivo de corto y mediano plazo. Por otra parte, si bien para la economía de un país es una partida escasa, no es menos cierto que el consenso liberal se “agarra” de este presupuesto para señalar de dónde habría que achicar para reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿en qué gasta el Estado en materia de desocupados?

En primer lugar, el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social destina un monto de dinero dirigido al programa Potenciar Trabajo. En 2021 la partida asignada a “ayuda a personas” o “asistencia directa”, es decir, el pago de los montos de los planes, fue de unos 220 mil millones de pesos (a dólar informal se trató de unos 1.309 millones de dólares). Aclaremos que se trata del rubro “ayuda a personas” porque bajo este programa también se destina otra partida presupuestaria en gastos inútiles que más adelante sumaremos como parte de lo que se podría pagar directamente a los desocupados, la cual redundará en pagos por “administración de programas”, remuneraciones de la “conducción” de quienes se encargan de estos programas, “viáticos”, o bien, aparecen rubros “sin discriminar”.

En segundo término, la otra partida importante que paga el Estado a los desocupados es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. En el primer caso, un monto de dinero dirigido a los hijos escolarizados; mientras que, en el segundo, una partida bajo la forma de tarjeta para la compra de alimentos. Si bien es cierto que ambos presupuestos no van dirigidos únicamente a los desocupados, sino que también se subsidia a trabajadores de bajos recursos ocupados en la informalidad, para la elaboración de la cuenta hemos estimado cuál es la partida específica dirigida a las personas desocupadas. El resultado es el siguiente: por la tenencia de la Tarjeta Alimentar el Ministerio de Desarrollo Social destinó en 2021 a los desocupados unos 141.500 millones de pesos; mientras que, la ANSES pagó por la AUH a las familias de desocupados un equivalente a 148.000 millones de pesos (se trata de 841 y 880 millones de dólares anuales, respectivamente).

En tercer lugar, otra partida que se destina fundamentalmente a las personas desocupadas es la que se le paga a los comedores y merenderos, por un lado, y el complemento alimentario, por otro. Un presupuesto que llega bajo la forma de alimentos y bolsones aproximadamente a 1,3 millones de personas, según el monitoreo elaborado por SIEMPRO. Son dos partidas que en materia de “ayuda directa a las personas” sumaron en el año 2021 unos 20.300 millones de pesos (120 millones de dólares). Finalmente, incorporamos la partida presupuestaria dirigida a los beneficiarios del Seguro por Desempleo, es decir, personas que tuvieron empleo “en blanco” y que fueron expulsadas de sus trabajos. A esa población se le paga un beneficio y un monto de dinero en materia de asignaciones familiares. La suma total dirigida a estos desocupados en 2021 fue de 18.200 millones de pesos, o

sea, unos 108 millones de dólares (ver Tabla 1). Con todo, estamos hablando de un presupuesto de unos 548 mil millones de pesos, o sea, unos 3.260 millones de dólares.

Con estos datos sobre la mesa y partiendo del supuesto del pago de un sueldo equivalente al valor de la canasta de pobreza, el presupuesto faltante para emplear al conjunto de los desocupados oscila entre los 7.300 y los 12.200 millones de dólares. En términos de porcentaje de PBI estos valores representan entre los 2,66% y 4,45% (ver Tabla 2). Se trata de un presupuesto elevado, sí, pero que bajo la forma de un Estado productivo incrementaría notablemente las reservas, y que a su vez elevaría considerablemente el nivel de vida de buena parte de la población.

¿De dónde sacar más plata?

Como mencionamos, el gobierno ya prometió la entrega de una parte del presupuesto de la Obra Pública a las cooperativas de beneficiarios de planes de empleo de cara al 2023. De modo que, con ajustes en marcha, este presupuesto redundará en más partidas a los desocupados perceptores de planes sociales. A su vez, hay otros presupuestos que podrían reasignarse a los desocupados. Por ejemplo, el sostenimiento del aparato del Estado supone elevadísimos montos de gastos completamente inútiles, o bien, destinados a sostener a la burguesía parásita sin ningún beneficio real para el conjunto de la población. Aquí esbozamos algunos sucintos datos sólo a los efectos de pensar de dónde se puede obtener más presupuesto y reasignarlo en partidas productivas que eleven el nivel de vida de la población, pero que de ningún modo agotan las posibilidades de mayores partidas.

Por empezar, si estimamos la partida presupuestaria en materia de obra pública que se reasignará en 2023 a las cooperativas de desocupados y deflactamos hacia un año atrás, el resultado sería que el 30% estipulado para las obras que hoy suponen un monto de hasta 300 millones de pesos (que en 2021 hubieran sido de hasta 190 millones), hubieran representado un presupuesto anual de 20.700 millones de pesos (equivalentes a 123 millones de dólares). Suponiendo que todo ese presupuesto o buena parte de él fuera a parar a las cooperativas bajo la forma de salarios no sería nada despreciable, aunque ese monto representa un 6,11% de todo el presupuesto de Obra Pública.

Por otro lado, buena parte del gasto destinado a los desocupados brota del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, una parte va dirigido a “ayuda directa a personas”, mientras que, otra parte es gasto de “administración” o “coordinación” de los programas, o bien, partidas que no se sabe a dónde van a parar y aparecen registradas como “sin discriminar”. Sólo de los programas Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, complemento alimentario y otros rubros se destinaron a gastos que no son dirigidos directamente a los beneficiarios una suma equivalente a 51.600 millones de pesos, durante el 2021. Si a esto le agregamos el gasto dirigido a ayuda de personas que no son los programas anteriores, pero que de alguna manera se vinculan con los desocupados, como son los montos dirigidos a los comedores escolares y a otros rubros, en total suman otros 20.300 millones de pesos. En total serían unos 72.000 millones de pesos, los cuales equivalen a 427 millones de dólares. Alguno se preguntará que pasaría con los empleados del Ministerio de Desarrollo Social si todo su presupuesto va a parar a los desocupados. Se trata de 7.550 empleados (entre planta permanente, transitoria y contratados), los cuales serían reasignados a otras actividades del Estado, sin afectar su salario.

Luego, nos encontramos con que varios ministerios designan alguna partida que de manera directa o indirecta va a parar a los desocupados. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo designa una partida presupuestaria a rubros tales como “acciones de empleo”, “seguro y capacitación” e “inclusión laboral de jóvenes”. El Ministerio de Educación destina un monto a las becas PROGRESAR (la mayoría son hijos e hijas de desocupados e informales). Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros destina un presupuesto a la “coordinación de proyectos socio comunitarios” del programa “El Estado en tu Barrio” para el Fortalecimiento de Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial”. Incluso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asigna una partida presupuestaria a la “Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial” y programas de “Inclusión Socio-Económicas”. Al sumar todo este presupuesto estamos hablando de unos 58.600 millones de pesos en 2021, es decir, 348 millones de dólares.

Los gastos del Senado de la Nación resultan inútiles si tenemos en cuenta que ya existe la Cámara de Diputados y unos cuantos funcionarios burgueses dirimen sobre los destinos de la sociedad capitalista. ¿Cuánto presupuesto fue a parar al Senado en 2021? Unos 19.300 millones de pesos (115 millones de dólares), de los cuales la abrumadora mayoría fue destinada a salarios de funcionarios y de sus asesores. Pero es no es todo. Otra partida fue a parar a las “Impresiones y publicaciones parlamentarias”. Fueron 1.429 millones de pesos (8,5 millones de dólares) en gastos que podrían haberse evitado con publicaciones virtuales. En otro orden, los salarios a curas, párrocos y sacerdotes se llevaron unos 279 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Gastos que pueden reasignarse en el empleo de desocupados.

¿Y las jubilaciones de privilegio? ¿Cuántos millones se podrían reasignar si se rebajaran esas partidas a cifras más modestas? Veamos. Según la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el año 2021 hubo unos 47.000 jubilados que cobraron ingresos previsionales por encima

del haber máximo establecido, el cual fue estimado en 154.661 pesos. Para ponerlo en contexto, este valor superó en más del doble el valor de la canasta de pobreza para una familia tipo. Hay muchas jubilaciones de jueces y diplomáticos que son extremadamente elevadas. Al sumar el monto que excede el haber máximo y multiplicarlo por la cantidad de jubilados que lo perciben, el resultado es una suma equivalente a los 38.000 millones de pesos, es decir, unos 225 millones de dólares. Alguno podría objetar esta reasignación de recursos y señalar que mejor sería utilizar esos montos para incrementar el haber de los jubilados pobres. Sin embargo, el problema de las jubilaciones y de todo el sistema de la seguridad social sólo podrá resolverse realmente con un aumento sustancioso del trabajo productivo.

Para sintetizar, sin contabilizar la masa gigantesca de recursos destinada a subsidiar a la burguesía a través de programas industriales, a la energía, al transporte, a la infraestructura y otros tantos, que es sin duda el mayor derroche en una Argentina improductiva e ineficiente, y tan sólo esbozando muy rápida y sucintamente algunas partidas presupuestarias que visualizamos como gastos inútiles a reasignar o que ya va dirigido a los desocupados, obtenemos como resultado un monto que en 2021 fue equivalente a 210 mil millones de pesos, cifra que representa a un 0,45% del PBI y unos 1.249 millones de dólares.

Con estos montos, que como ya dijimos son apenas un iceberg de lo mucho que se puede reasignar, el presupuesto faltante para contratar a todos los desocupados en tareas productivas del Estado se reduce a un 4% y 2,21% del PBI, según la cantidad de desocupados que se tome como válida.

Un proyecto de mediano plazo por etapas

Como vemos, existe un presupuesto que ya va destinado a los desocupados y masas gigantesca de plata que, bajo la forma de gastos inútiles, administrativos, de conducción, impresiones innecesarias, jubilaciones de privilegio que podrían reducirse, obra pública y otros tantos, se diluyen en el sostenimiento del aparato del Estado o en subsidios a la burguesía improductiva. Aún siendo conservadores, los montos faltantes para contratar a todos los desocupados en el Estado no son extremadamente abultados. Incluso, hasta podría elaborarse un plan de corto y mediano plazo, de no más de tres a cuatro años, incrementando anualmente un 1% del PBI en la creación de empleo productivo en el Estado. Lo cual redundaría en ganancias para el conjunto de la población, toda vez que, por tratarse de la elaboración de mercancías exportables o sustituibles por otras para exportar, el resultado sería una mayor inserción de la Argentina en el mercado mundial y, consecuentemente, la creación de riqueza. Riqueza que puede crearse de la mano de una vía socialista y un Estado que planifique el camino a seguir y la organización de la economía.

Anexo de tablas

Tabla 1. Partidas presupuestarias destinadas a la población desocupada (2021).

Partidas presupuestarias (ayuda directa a personas) dirigida a los desocupados	2021	
	PESOS	DÓLAR INFORMAL
POTENCIAR TRABAJO (dirigido a beneficiarios de planes sociales)	220.255.576.836	1.309.331.086
TARJETA ALIMENTAR (sólo a los hijos de desocupados y beneficiarios de planes)	141.473.487.131	841.003.153
COMEDORES y MERENDEROS (1,3 millones de beneficiarios promedio)	10.459.360.161	62.176.702
COMPLEMENTO ALIMENTARIO	9.836.895.214	58.476.398
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (sólo a hijos de desocupados y beneficiarios de planes)	148.050.574.299	880.101.299
SEGURO POR DESEMPLEO (beneficios y asignaciones familiares para sus hijos)	18.228.190.426	108.359.283
SUBTOTAL EN ASISTENCIA DIRECTA A DESOCUPADOS	548.304.084.068	3.259.447.920
Porcentaje de asistencia directa a desocupados sobre el PBI Economía.	1,18	1,18

Durante el año 2021, el Estado pagó un presupuesto destinado a los desocupados bajo diversos programas equivalente a más de 500 mil millones de pesos, cifra que representa al valor del dólar informal unos 3.259 millones de dólares. Se trata de un 1,18% del PBI. Considerando que la cantidad de desocupados oscila entre los 2 y los 3 millones de personas, este presupuesto no representa una magnitud elevada. Aún así, los liberales, los opositores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos quieren meter más tijera acá para reducir el déficit fiscal atacando las condiciones de vida de la población más pobre.

Tabla 2. Cantidad de desocupados y presupuesto pagado y pendiente para emplearlos (2021).

Fuente: CEICS en base a INDEC, ANSES y Ministerio de Desarrollo Social.

En base a las estimaciones, suponiendo la existencia de 3,2 millones de desocupados (opción 1), el presupuesto faltante para emplearlos productivamente en el Estado con un sueldo equivalente a la canasta de pobreza sería equivalente al

Presupuesto pagado y pendiente para contratar a desocupados en el Estado (2021)	Opción 1	Opción 2
Cantidad de desocupados	3.267.723	2.231.554
Valor mensual promedio 2021 de la canasta de pobreza (CBT)	66.510	66.510
Presupuesto total por salario mensual equivalente a CBT (anualizado en pesos)	2.608.029.297.219	1.781.043.637.368
Presupuesto total por salario mensual equivalente a CBT (anualizado en dólar informal)	15.503.688.402	10.587.590.259
Presupuesto pendiente para emplear a desocupados por salario = CBT (en pesos)	2.059.725.213.152	1.232.739.553.300
Presupuesto pendiente para emplear a desocupados por salario = CBT (en dólar informal)	12.244.240.481	7.328.142.339
Presupuesto pendiente como % de PBI	4,45	2,66

4,45% del PBI. Mientras que, suponiendo la existencia de 2,2 millones de desocupados (opción 2), el Estado debería incrementar un presupuesto equivalente al 2,66% del PBI para dar empleo productivo con un sueldo equivalente al valor de la canasta de pobreza.

Notas:

1. Todos los valores fueron expresados al promedio del dólar informal de 2021 el cual fue de \$168,22.

Cómo producir energía, evitar incendios y generar empleo en blanco en Córdoba



Claudio Macor
Vía Socialista

En este artículo pretendemos contribuir a la elaboración de alternativas productivas regionales y locales, como parte del programa de Vía Socialista. Nos proponemos hacer una evaluación económica y ambiental del desarrollo geográficamente extensivo de sistemas de tratamiento de la fracción orgánica de los RSU (residuos sólidos urbanos) a través de procesos de biodigestión anaeróbica. Entendemos que en la provincia de Córdoba hay graves problemas medioambientales que requieren una solución urgente. Estas soluciones no pueden derivar de la desaparición de ciertas ramas productivas o retrotrayendo la productividad del trabajo a niveles medievales. El desafío que nos hemos planteado en vía socialista es mejorar el estado de la naturaleza sin afectar la productividad del trabajo. En este artículo mostramos que el desafío se puede lograr.

El problema

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Córdoba es la provincia que más RSU genera, detrás de Buenos Aires, con un total de 1.600.000 tn/año en 2020, proyectándose más de 2.000.000 tn/año para 2030. La disposición final de RSU es particularmente problemática en la provincia. Aunque los basurales cielo abierto (BCA) están prohibidos hace más de 20 años por la ley 9.088, solo los departamentos La Capital y Río Cuarto cuentan con relleno sanitario, en el resto de los 24 departamentos de la provincia la disposición se realiza mayormente en vertederos o basurales a cielo abierto (BCA) con quemas sistemáticas de los residuos.

El Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba (2016) informa y geolocaliza más de 700



BCA, observándose una concentración en Regiones Naturales como Pampa de Achala y Sierras del Sur. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un problema medioambiental relevante en América Latina es el tratamiento inadecuado de los RSU. En particular, su disposición en vertederos informales y BCA. En estos espacios, la descomposición de los residuos orgánicos en contacto con residuos de otro tipo produce un líquido tóxico, conocido como líquido lixiviado, que se filtra a las napas subterráneas contaminando agua. Siendo la escasez de agua un problema prominente y urgente para buena parte de la provincia de Córdoba, la situación se torna particularmente relevante en la provincia.

En estos espacios, los residuos son sometidos a quemas periódicas y sistemáticas, con el objetivo de reducir el volumen que suele derivar en incendios descontrolados. Los recientes incendios en las sierras de Córdoba arrasaron 10.000 hectáreas de bosque nativo y tuvieron entre sus causas más importantes quemas en BCA. Eliana Lacombe, investigadora de CONICET señala: “Solo en las Sierras Chicas, se han perdido 4.800 hectáreas de bosque nativo. Es verdad que uno de los focos donde comenzaron los incendios fue el basural de Huerta Grande”, por su parte el propio gobierno de Córdoba reconoce que los incendios en Salsipuedes habrían tenido su origen en un BCA.

¿Cómo lo resolvemos?

Nuestra propuesta pretende reducir la disposición final de los residuos orgánicos reutilizándolos a través de biodigestores para producir biogás y biofertilizante. Es un proyecto de doble impacto: mejora el estado de la naturaleza y crea valor y riqueza.

¿Nuestra población objetivo? Aglomerados de entre 2.000 y 50.000 habitantes. ¿Por qué? Primero, porque la correcta separación en origen es más factible de lograr en pequeñas localidades que en grandes ciudades. Segundo, porque los BCA son una realidad generalizada en lugares con menor

población. Tercero, porque es la escala que nos permite trabajar con biodigestores de producción nacional, accesibles técnica y económicamente y fáciles de operar y mantener.

Por supuesto que en etapas posteriores debemos avanzar en extender estos sistemas a las grandes ciudades, tal como se está haciendo en Europa, Estados Unidos, China e India. Esa escala habilita grandes potencialidades para el uso del biogás.

Para poder explicar cómo se produce ese biogás, debemos entender tres conceptos: biodigestión anaeróbica, biofertilizantes y biodigestores. La biodigestión anaeróbica es un proceso metabólico realizado por microorganismos anaeróbicos (los que se desarrollan en ausencia de oxígeno). Estos actúan sobre la materia orgánica metabolizándola en elementos químicos más simples que son los que componen lo que conocemos como biogás y biofertilizante. El primero tiene una composición estándar de 60-70% de metano, 30-45% de dióxido de carbono, y restos de anhídrido sulfuroso, nitrógeno e hidrógeno.

El biofertilizante es un líquido estable, que culminó el proceso de fermentación y en su composición química se encuentran cantidades significativas de nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. De esta manera, lo que era basura orgánica contaminante y un foco de incendios forestales, se ha transformado en bienes con valor de uso y valor de cambio: energía y fertilizante.

Por último, los biodigestores son dispositivos tecnológicos que permiten una reproducción controlada de la biodigestión anaeróbica. Existe gran variedad de biodigestores con diferente grado de complejidad técnica tecnológica. Según nuestro análisis, el modelo más eficiente para el objetivo planteado es el tubular de poliuretano de alta densidad: accesible económicamente y de fabricación nacional, extensa vida útil y apto para la escala propuesta. El análisis que presentamos a continuación se basa en el rendimiento medio de este modelo.

¿Cuánto rinde un biodigestor? Ensayos realizados por el INTA, el INTI y la UNL nos permiten hacer la siguiente estandarización: por cada tonelada de RSUO promedio se obtienen 100 m³ de biogás y 900 litros de biofertilizante (BIOL). [Tal como publicamos en otro número de El Aromo.](#)

Un proyecto para las localidades chicas de la provincia

Según el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, la cantidad media de residuos sólidos orgánicos generados por habitante es 0,45 kg diarios. Para nuestro análisis agregado consideramos 0.30 kg diarios.

En base al censo 2010 y datos preliminares del censo 2022, en la provincia de Córdoba hay 170 aglomerados en los que habitan entre 2.000 y 50.000 personas, totalizando 1,53 millones de personas. El volumen potencial de residuos orgánicos que corresponde al universo de referencia es de 167.537 tn/año lo que equivale a la producción de 16.753.700 de m³ de biogás y 150.783 m³ de biofertilizante que, en término medio, según la tabla anterior, concentran 3.769 tn de nitrógeno y 1.658 tn de fósforo.

El sistema permite transformar 167.537 toneladas de residuos orgánicos por año que son fuente de contaminan agua e incendios forestales, en bienes con valor económico: 16,75 millones de m³ de biogás y 150.783 m³ de biofertilizantes.

Sobre el método de valoración del biogás remitimos al lector al número 2 de la revista. De allí se desprende que 27.8 m³ de biogás tienen un poder calorífico equivalente a 1 millón de BTU (MMBTU) por lo tanto, la producción potencial de biogás (95% metano) en nuestro universo de referencia contiene 572.302 MMBTU. Según informa Trading Economics, la cotización para el segundo trimestre de 2023 es USD 66,8 el MMBTU. De esta manera, el valor económico del biogás alcanza 38.229.773 dólares/año.

Para estimar el valor económico del volumen de BIOL, realizamos un relevamiento del valor de mercado de fertilizantes orgánicos con composiciones químicas similares, oscila entre \$ 1.500 / litro (empresas nacionales que producen para el mercado interno) y 27 dólares el litro (empresas de EE.UU. y Nueva Zelanda que lo comercializan con fórmula). Si tomamos como referencia, \$1.000 para 1 litro, el valor de mercado del biofertilizante es \$ 150.783 millones de pesos (837 millones de dólares). Además, siendo que Córdoba consume el 25% del total de fertilizantes consumidos en el país, puede inferirse que en la provincia destinan más de usd 500 millones al año para importar fertilizantes. Es por ello que nuestra propuesta tiene una particular relevancia para la agricultura local y la sustitución de importaciones.

En resumen, el valor económico anual que la implementación de nuestro proyecto generaría en la provincia de Córdoba es de usd 875 millones (biogás + biofertilizantes)

De acuerdo a la distribución poblacional entre las localidades objetivo que surge de los censos 2010 y 2020 la cantidad de sistemas a instalar en toda la provincia es 380. Las actividades laborales directamente necesarias para el funcionamiento del sistema incluyen: control y carga de la materia orgánica, gestión y control del funcionamiento de biodigestor, fraccionamiento y envasado el BIOL, mantenimiento de las instalaciones y el sistema. Estimamos que un total de 6 trabajadores con una jornada laboral de 36 horas semanales pueden completar las operaciones en cada sistema, por lo

tanto, se estarían generando 2.280 empleos directos. Trabajo productivo, formal, local y sostenible económica y ambientalmente. Es además un trabajo que produce un excedente puesto que el valor generado es superior al expresado en los salarios.

El impacto ambiental

La producción de biogás y biofertilizantes es neutral en carbono. Por ello, para determinar el impacto ambiental, estimamos la huella de carbono correspondiente al volumen de gas natural y fertilizantes industriales que pueden ser reemplazados por el biogás y los biofertilizantes producidos.

La huella de carbono refleja la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten, directa e indirectamente, para producir una determinada mercancía, en nuestro caso, gas natural y fertilizantes industriales, y se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tceq) por unidad de mercancía producida.

En el caso del gas natural, el factor de emisión según la EIA, es 52.91 kceq por MMBTU, es decir la producción y combustión de 1 MMBTU en gas natural emite 52,91 kilogramos de carbono equivalente. Según estimamos en el apartado anterior, el total de biogás producido equivale a 572.302 MMBTU, lo que permitiría un ahorro en la huella de carbono de 30.280 tceq/año.

La International Fertilizer Society, señala que el factor de emisión de la producción de una tonelada de nitrógeno es 6.2 toneladas de carbono equivalente (tceq). Es decir, por cada tonelada de nitrógeno producida se emiten 6.2 (tceq). Por lo tanto, las 3.769 toneladas del nitrógeno contenidas en el BIOL, permitirían ahorrar las 23.368 tceq que corresponden a la producción de nitrógeno. Para los P-fertilizantes, estima un factor de emisión 1.1 tceq por tonelada de fosfato producido. Por lo tanto, las 1.658 toneladas de fosfato contenidos en el BIOL permitirían ahorrar la emisión de 1.824 tceq que corresponden a la producción de fosfatos.

En definitiva, la implementación del sistema reduciría en 55.472 tceq/año las emisiones de GEI en la provincia de Córdoba.

La reducción en la compra y el uso de agroquímicos

Córdoba consume casi el 25% del total de fertilizantes en Argentina, esto es 1,4 millones de toneladas/año. Siendo que en la provincia de Córdoba coinciden un intensivo uso de fertilizantes industriales (con perspectivas de crecimiento) y escasez de agua dulce, una política de mitigación al problema debería ser prioritaria y urgente, sin embargo, brilla por su ausencia.

Las 3.769 tn de nitrógeno y 1.658 tn de fosforo contenidas en el BIOL producido equivalen a 8.193 tn de urea y 4.145 tn de fosfato diamónico, respectivamente. Es decir, el sistema propuesto permitiría a Córdoba reducir el uso 8.193 tn/año de urea y 4.145 tn/año de fosfato diamónico.

Desde Vía Socialista entendemos que una mitigación real y efectiva al problema puede lograrse planificando una transición (que será parcial) desde los fertilizantes industriales a los biofertilizantes o fertilizantes biológicos. Esto permitiría reducir el uso de fertilizantes industriales y todos los problemas asociados, sin afectar la productividad agraria. Este proyecto es el primer paso en la planificación de la transición.

Conclusión:

El proyecto presentado en este artículo contribuye a generar una riqueza equivalente a U\$S 875 millones por año en la provincia de Córdoba y a crear 2.280 nuevos puestos de trabajo directos a escala local. Un trabajo productivo que permite tomar trabajadores en blanco y genera un excedente que podría ser apropiado por los gobiernos locales para fines productivos.

El impacto ambiental es particularmente significativo para la provincia, porque es una herramienta importante para la erradicación de la gran cantidad de BCA y vertederos informales que están contaminando agua y causando incendios forestales, entre otros problemas. Además, reduce significativamente la emisión de GEI. Por último, permite reemplazar fertilizantes industriales por fertilizantes biológicos y orgánicos, que no contaminan y permiten sostener la productividad en estas actividades.

Este proyecto muestra dos cosas. Primero, la posibilidad de llevar energía limpia, evitar incendios (con las pérdidas materiales y humanas que ya conocemos), crear empleos en blanco, ahorrar divisas y cuidar el medioambiente es posible. No se hace porque hay intereses en contrario. Segundo, para hacerlo, hace falta una [centralización de las decisiones y una planificación](#). Es decir, no se puede dejar estos problemas a la espontaneidad del mercado ni a la inmediatez de ganancia de un [empresariado provincial parásito](#).

Al igual que la [propuesta energética para todo el país](#), solo con una planificación socialista, la provincia -y en especial sus pueblos más rezagados-, podrá empezar a resolver sus problemas y ponerse en la senda del desarrollo.

Una medida contra el trabajo infantil en Misiones



Ezequiel Flores
Vía Socialista

El trabajo infantil es un flagelo mundial que en nuestro país está lejos de erradicarse. Según la última encuesta (2016-2017), alrededor de 764.000 niños y niñas de entre 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva en Argentina. De este total un 38% lo hace directamente para el mercado. Por otro lado, cerca de 429.000 adolescentes de entre 16-17 años realizan una actividad productiva y el 57% lo hace para el mercado. La encuesta contrasta la situación en los ámbitos rural y urbano y también por región. En las zonas rurales 206.635 niños y niñas de 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva. De este total, 72.808 trabajan en actividades económicas destinadas al mercado representando al 7% de niños y niñas que residen en zonas rurales. En el NEA rural 7,7% de niños y niñas trabajan para el mercado. Mismos porcentajes se encuentran en la región pampeana y similares a la región de Cuyo (7,4%). Siendo estas las regiones con mayor presencia del trabajo infantil en las zonas rurales. Cabe aclarar que los datos estadísticos disponibles datan de hace cinco años y no nos permiten saber si este panorama se agudizó o no tras la cuarentena producida por la pandemia por Covid-19. Nos obstante, recientes declaraciones de la Ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, dan cuenta que la pandemia agudizó el trabajo infantil en el mundo.

En este contexto regional, la provincia de Misiones registra un 8% de riesgo de trabajo de trabajo infantil y adolescente, indicador que señala la probabilidad de encontrar trabajo de niñas, niños y adolescentes en un determinado espacio. El dato resulta alarmante porque supera la media nacional que es de 6,5%. Al interior de la provincia, son cuatro los departamentos que notifican riesgo alto (entre el 9 y 11%): General Manuel Belgrano, San Pedro, Guaraní y 25 de Mayo; otros cuatro departamentos presentan un riesgo medio (entre 8 y 9%): Cainguas, San Ignacio, Concepción y Apóstoles, y nueve presentan riesgo bajo (entre 6 y 8%): Iguazú, Eldorado, Montecarlo, Libertador General San Martín, Capital, Candelaria, L.N. Alem, San Javier y Oberá.

Los departamentos de riesgo alto y medio presentan una serie de características en común: mayor porcentaje de población rural, mayor proporción de niños, niñas y adolescentes que no asisten a establecimientos escolares, mayor porcentaje de población con carencias críticas, mayor porcentaje de jefes de hogar asalariados no registrados y menor proporción de niños y niñas alcanzados por la Asignación Universal por Hijo. A su vez, esta problemática se asocia a distintas actividades económicas. En particular, en el agro misionero está fuertemente relacionado, por un lado, al trabajo en las chacras de los “productores” –ya sea para consumo propio o para ventas en ferias- y, por otro, a las producciones de tabaco y yerba mate. Esta última resulta ciertamente significativa debido a que la provincia es la principal productora del país. Actualmente, a pesar de que hay un incipiente intento de mecanizar la cosecha de yerba-mate, el grueso de la misma se realiza de manera manual y se extiende entre marzo y agosto. Los trabajadores de la cosecha son identificados popularmente como tareferos/as.

En su conjunto, los tareferos se encuentran bajo la línea de pobreza, percibiendo un salario a destajo y, en muchos casos, en negro. Estas condiciones históricas favorecieron el trabajo de niños en los yerbales debido a que una mayor cantidad de manos cosechando aumenta la productividad y por tanto se vuelve un factor salarial clave. Los bajos salarios les permiten a los patrones yerbateros, en general chicos, ahorrar en “costos laborales”. A su vez, otro de los factores que condicionan especialmente a las tareferas, es tener que cumplir con el mandato patriarcal que deposita sobre ellas el rol del cuidado de sus hijos a la par que tienen que trabajar en el yerbal. Así las cosas, la edad de inicio de trabajo en la cosecha de yerba-mate entorno a los 10 o a veces menos. Las pésimas condiciones laborales que rigen en la tarea llevan a que frecuentemente se conozcan noticias de accidentes que involucran niños y que, en algunos casos, son fatales.

Todo esto ocurre en un país cuya legislación adhiere a las convenciones internacionales de la OIT y la UNESCO, que promueven la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Entonces, es preciso revisar las distintas iniciativas del Estado argentino frente a esta problemática para poder evaluar su efectividad y pensar propuestas para eliminar el trabajo infantil. Una de ellas es la creación de espacios de cuidados para la niñez. Esta iniciativa comenzó a implementarse de forma aislada en Andresito, Departamento General Belgrano del noreste de la provincia de Misiones por iniciativa del sindicato de tareferos con el nombre de “Espacio de cuidado Zamba”.

El proyecto Zamba

Comencemos por conocer el contexto. Como vimos más arriba, Gral. M. Belgrano es un departamento con riesgo alto de presencia del trabajo infantil, a su vez, es el quinto Departamento con mayor superficie de yerba-mate cultivada (17.192 Has). En una de sus ciudades más importantes, Comandante Andresito, viven 1.560 tareferos, el 19,5% de los tareferos relevados de la provincia. A su vez, el asentamiento 20 de junio, básicamente un barrio de familias tareferas, es donde se construyó el Espacio de Cuidado “Zamba” que fue inaugurado el 10 de mayo de 2022 en el marco del programa “Buena Cosecha”.

Zamba funciona de 4:00 a 18:30 de lunes a viernes, tanto en el período zafra como durante los meses en los que no se lleva adelante la cosecha. En ese tiempo, se garantiza desayuno, almuerzo y merienda para niños y niñas que asisten y se los traslada, a la escuela o al jardín según corresponda, y se los busca para que merienden y esperen ser retirados por sus tutores. También se realizan actividades lúdicas, educativas y recreativas varias.

A pesar de la responsabilidad que implican las tareas y de cumplir turnos rotativos de no menos de 6 horas, los trabajadores de Zamba se encuentran en una situación laboral precaria, puesto que no están contratados, sino que sólo perciben el plan social Potenciar Trabajo, como remuneración.

A la precariedad laboral se suman otras limitaciones. Una de ellas es el espacio físico que, si bien pretende albergar a 50-60 niños, no contiene las dimensiones para hacerlo. Si bien asisten regularmente alrededor de 30 niños, la demanda es mayor. Otro déficit es la falta de capacitación específica para el cuidado de niñas y niños, especialmente para el cuidado de menores a 4 años.

Un límite y un horizonte

Zamba irrumpe en la provincia al ser el primer espacio destinado específicamente a hijas e hijos de tareferas/os y se sitúa en una localización estratégica. Las familias tareferas lo valoran porque les otorga una alternativa para ir a trabajar sin tener que llevar a sus hijos al yerbal. El hecho de que a poco de su inauguración tenga una asistencia regular de 30 chicas y chicos da cuenta de su potencial y de su límite. Es un cupo muy bajo para la demanda que existe. Además, está claro que, con salarios precarios, sin contratación en blanco y sin capacitaciones, sus trabajadores actualmente lo mantienen funcionando a pulmón.

El Estado bien podría intervenir allí, contratando en blanco a sus trabajadores, brindando capacitaciones y personal adecuado para distintas tareas educativas, desarrollando una mayor infraestructura para que pueda alcanzar a más niños, etc. Esta no puede ser una iniciativa aislada, sino que debe extenderse al conjunto de la provincia para que alcance a los tareferos de otras localidades y a trabajadores de otras producciones, que lo necesitan. Es también un proyecto que puede extenderse a otras provincias con actividades donde las familias necesitan espacios para sus hijos. Ello crearía miles de puestos de trabajo y contribuiría a [reemplazar planes por puestos de trabajo](#).

Es evidente que esta política es una solución parcial y no ataca el problema de fondo. La producción yerbatera no puede sostenerse a costa de salarios de miseria y jornadas laborales de 12 horas. Resulta imperioso avanzar en eliminar las condiciones estructurales que posibilitan la explotación laboral infantil. Entre ellas, la informalidad y el pago a destajo, y para ello es necesario reestructurar la producción, mediante la intervención de un [Estado productivo](#). En próximas entregas ampliaremos esta propuesta que busca reemplazar las pequeñas producciones improductivas por una de mayor escala que genere mejores condiciones y más trabajo.



Notas

1<https://bit.ly/3v8vWak>

2El Sistema de Información de Tareferos de Misiones, 2021 contabilizó a 8.000 tareferos registrados en 2021.

El retroceso de la industria pyme

Un balance de las exportaciones industriales a Brasil



Damián Bil

Vía Socialista

En un número previo de *El Aromo*, analizamos cómo la caída del mercado venezolano afectó a la economía argentina por la vía de prácticamente cancelar un destino importante de la producción de varios sectores industriales. En ese texto, señalábamos que este fenómeno se sumaba, como una especie de efecto de tijera, al fin del denominado “viento de cola”; es decir, a la caída de los precios internacionales de los commodities que habían permitido cierto impulso a la economía argentina (y de la región en general). La pérdida del empuje de las compras venezolanas, justamente por efecto de la debacle del precio del crudo y la profunda crisis en aquel país, afectó de manera considerable la actividad de varios sectores de los denominados industriales en la Argentina, que tenían en ese destino un comprador de peso. Señalábamos, también, que otro elemento de peso en la retracción de las exportaciones industriales era la caída de Brasil, sobre todo luego de la crisis de 2008-09. Proponemos aquí analizar con mayor detalle este proceso.

Una década de recesión

Si se observan los datos duros, la economía argentina en general, y su estructura industrial en particular, se encuentran en una larga recesión, que ya lleva casi una década. Si tomáramos indicadores generales de desempeño económico, podríamos observar un deterioro desde 2013-14. El PBI, a excepción de 2015 y 2017, desciende todos los años desde 2013. Si comparamos el año previo a la pandemia (2019) con 2013, es 3,8% menor (y un -4,3% si cotejamos 2021 contra 2013). El índice de actividad económica también sufrió un fuerte deterioro, sobre todo en 2018, donde acusó una caída del 7% interanual. El de producción industrial tuvo una caída anual de entre el 1,8% y el 2,6% en el trienio 2014-2016, y luego de una escueta recuperación en 2017, 2018 y 2019 acumularon una caída de más del 10%. El consumo en supermercados también cayó, un 7% en 2019. La inflación anual, de casi el 32% interanual entre 2014 y 2017, trepó a más del 50% en 2018-19 y actualmente se ubica encima de las tres cifras. Algo similar ocurrió con la devaluación del signo monetario.

Tabla 1. Evolución de indicadores económicos seleccionados, Argentina, 2014-2019

Año	PBI	Índice actividad económica	Índice de producción industrial	Consumo en supermercados	Inflación	Devaluación tipo de cambio nominal
2014	-2,5%	-1,5%	-1,8%	s/d	39,0%	30,6%
2015	2,7%	1,1%	-2,6%	s/d	31,6%	52,4%
2016	-2,1%	0,5%	-2,3%	-9,2%	31,4%	20,4%
2017	2,8%	2,5%	0,3%	2,6%	24,3%	17,1%
2018	-2,6%	-7,1%	-5,0%	-5,0%	50,0%	104,8%
2019	-2,0%	-0,2%	-6,3%	-7,2%	57,6%	59,1%

Fuente: elaboración OME en base a INDEC y BCRA

El comportamiento de las exportaciones

En efecto, la recesión y la profunda crisis en particular de la industria manufacturera, dio por tierra con el relato kirchnerista que aseguraba haber generado un “nuevo modelo productivo” desde 2003, contrapuesto al neoliberalismo de los ’90 o del macrismo. Una de las bases de este discurso fue la expansión de las exportaciones durante la primera década del siglo XXI, sobre todo de productos manufacturados no tradicionales. Es cierto que las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) pasaron de poco más de 8 mil millones de dólares en 2003 a 28 mil millones en 2011-2012. Si bien en un contexto de incremento del total de exportaciones, la participación promedio de las MOI se incrementó de un 28% a un 33%. No obstante, desde 2013 comenzaron a caer en términos absolutos y también relativos. Cristina deja su gobierno con un 37% menos de ventas externas de MOI en relación al período 2011-12. En la gestión de Macri, las manufacturas en general (contando también las de “origen agropecuario” o MOA), repuntaron muy levemente. En 2019 fueron, en valor, casi un 5% superiores a 2015. Pero en 2020, con la pandemia, las MOI se desplomaron nuevamente, casi un 31% menos que el año previo. Aun así, la balanza comercial

fue superavitaria, debido a un doble efecto: por un lado, los bienes primarios y agroindustriales mantuvieron valores cercanos a 2019; mientras que por el otro las importaciones se redujeron drásticamente por la recesión. Si bien en 2021 las ventas externas de MOI se recuperaron con cierta reactivación del comercio internacional, aún son 30% menores a las de 2013. La cuestión es que la participación de las MOI volvió a caer en la proporción, a un cuarto del total de exportaciones. Cabe señalar, además, que 6 dólares de cada 10 de esas ventas se destinan en su mayor parte a mercados regionales como Mercosur y resto de América Latina, con una escasa inserción en otras regiones. El descenso de estas exportaciones provocó un serio inconveniente a la economía, en particular a la estructura industrial, puesto que el mercado exterior permite a muchas ramas no convencionales traer divisas y destinar parte de sus ventas. En ese proceso, jugó un papel relevante la caída de la demanda brasileña. Veamos entonces cómo impactó esta situación en distintos sectores de la producción.

El retroceso de Brasil como cliente de la industria argentina

Brasil es un caso diferente al de Venezuela. Esta última entró en una crisis de gran magnitud luego de la caída del precio internacional del crudo luego de 2013, y redujo sus compras al exterior de manera brutal, casi un 90% en un lustro. En Brasil, el peor efecto de la crisis económica se concentró entre 2014, año de mayor volumen de importaciones, y 2016, cuando las mismas cayeron un 40%. En ese lapso, los envíos desde la Argentina a aquel país se vieron afectados en una proporción similar. Pero a diferencia de Venezuela, la dinámica del comercio exterior brasileño se recuperó y, sin llegar aún a los guarismos de 2011-2014, en 2021 el país importó productos por casi 220 mil millones de dólares. No obstante, la producción argentina no logró aprovechar esa dinámica. Mientras que hasta 2011, el país era el tercer proveedor externo del Brasil detrás de los EE.UU. y China, con un 9% de las compras; en la segunda década del siglo la participación cayó al 6% de las importaciones.

Al considerar la importación por rubro, la mayor parte de las compras del vecino país se focalizan en bienes industriales (al igual que en Argentina). Cabe destacar en este aspecto el papel de China: mientras que en 2002-2004 este proveedor solo representaba un 5% de las compras externas de Brasil, en 2009 llegó al 14%. Para ese entonces, EE.UU. le vendía un cuarto de lo comprado por el país. La Argentina, un 8,5%. Pero luego de la crisis, los EE.UU. retroceden al 17%, y China los desplaza del primer lugar (con 22,5% de las ventas en 2018-2021). Las ventas industriales de la Argentina cayeron al 6% en la segunda década del siglo y a menos del 5% en 2020-21. O sea, cuatro puntos menos que a comienzos de siglo. Si bien parece algo menor, en magnitud de valor es algo no despreciable para la economía argentina: mientras que en 2012-14 la exportación de la Argentina a Brasil llegó a 14 mil millones de dólares anuales, para 2015-21 el promedio cayó a poco más de 8 mil millones. Para el tamaño de la economía doméstica, es un monto nada despreciable.

Analicemos el impacto en algunas actividades. Revisemos la situación para más de 145 partidas arancelarias del nomenclador del Mercosur, repasando aquí la situación de alguna de las mismas. Entre las actividades químicas, la exportación de medicamentos fue una de las afectadas en el proceso reseñado. Hacia 2015-16, la exportación total del rubro alcanzó 780 millones de dólares anuales. Pero en 2019-20, descendió un 40%. Entre 2016-2021, la exportación a Brasil cayó un 13%. La actividad fabricante de productos de cuidado personal (higiene bucal, desodorantes, para afeitado, etc.), llegó a exportar 400 millones de dólares al año en 2011-2014, con casi tres quintas partes destinadas a Brasil. No obstante, desde 2016 esos envíos entraron en franco declive. A tal punto que en 2018-2020, el subsector solo envió al exterior aproximadamente 135 millones de dólares, menos de la mitad que en el período previo. Las importaciones brasileñas disminuyeron en un 77,6% (de casi 209 millones promedio a 47 millones al año). En 2008, la Argentina exportó 582 millones de dólares en venenos diversos (insecticidas, raticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros). El nivel de exportación permaneció en un rango cercano entre 2013 y 2015, y Brasil compró entre el 40% y 50% de ese monto. Entre 2018 y 2021, la demanda brasileña cayó a menos de la mitad (92 millones al año), lo que impactó en la exportación total de la actividad que se contrajo en una magnitud similar.

En el sector plástico, Argentina exportó en 2011 placas por un valor de 230 millones de dólares. Brasil absorbió, en 2011-14, un tercio de ese monto. Sin embargo, sus pedidos se reducen al año siguiente, arrastrando la demanda argentina de esta actividad en el exterior: en los últimos cuatro años, Brasil compró por menos de 22 millones anuales, un 70% menos que en su mejor momento. Entre los productos agrupados en “equipo de transporte”, el conjunto de chasis, carrocerías y partes es una de las MOI que acumula mayor valor de exportación durante el presente siglo. Entre

2012 y 2013, estas partidas registraron más de 1.461 millones de dólares de ventas externas. El grueso de las mismas se destinó a Brasil, quien compró por casi 1.000 millones al año en ese bienio. Pero entre 2016 y 2021, las compras cayeron un 60%, con Brasil retrocediendo en ese rango. En el mismo segmento, es conocida la crisis del sector automotriz argentino al menos desde 2014, que ningún plan [ni bajo el kirchnerismo ni bajo el macrismo](#) logró revertir. El país llegó a exportar 4.200 millones de dólares por año en automóviles entre 2010 y 2013. Es cierto que la inserción internacional fue muy limitada, ya que Brasil representó el 95% de esa demanda. El problema es que esta nación no sostuvo su demanda, que se retrajo sustancialmente por debajo de los 1.300 millones en los últimos cuatro años.

Existe en el país una miríada de firmas que producen máquinas y equipos varios. Una de esas producciones es la de bombas para líquidos, compresores y aparatos de ventilación. Aquí llegaron a exportarse casi 270 millones de dólares al año entre 2010 y 2013, de los cuales Brasil consumió más de un cuarto. A partir del año posterior, estas ventas al exterior disminuyeron a poco menos de la mitad, con Brasil consumiendo solo por 21 millones de dólares al año durante los últimos cuatro, un 65% menos que en 2010-13. En motores, generadores, grupos electrógenos, se exportaron en 2009-2012 productos por más de 130 millones de dólares al año. En 2010, Brasil compró por 50 millones de dólares. Pero, desde 2014, las exportaciones cayeron a menos de la mitad. Entre 2016 y 2021, el país vecino pasó a demandar apenas 7 millones por año de estos productos, una merma del 80%.

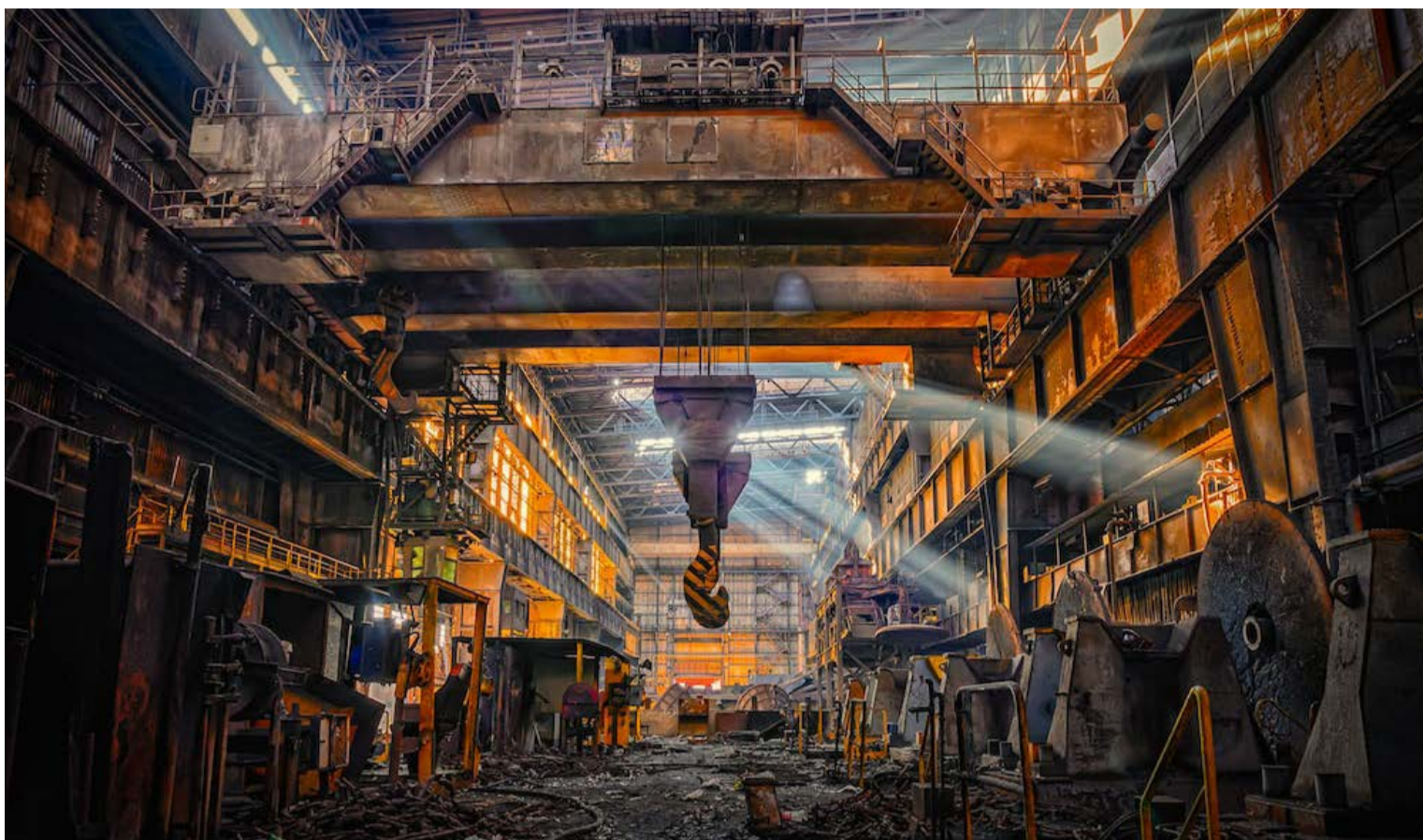
En manufacturas de metales diversos, la Argentina tuvo un pico exportador en 2011, con 295 millones de dólares. Luego de ese año, inició un marcado descenso que la llevó a casi un tercio en 2020 (104,5 millones). Brasil pasó de comprar casi un 40% de las exportaciones argentinas en 2011 a menos de un quinto en 2020: de 103 millones al año (2011-13) a solo 26 millones (2018-21).

Otra producción, con cierto nivel de exportación en las primeras décadas del siglo, es la que nuclea grúas, carretillas, apiladoras y otros aparatos de elevación. En 2011, Argentina exportó por 110 millones de dólares, la mitad a Brasil. Desde ese entonces, su demanda se desplomó: entre 2013 y 2021, se redujo la exportación total a 35 millones anuales, con Brasil adquiriendo apenas 2,4 millones al año de dichas mercancías. En remolques y semirremolques, nuestro país vendió al exterior por más de 60 millones de dólares anuales en 2011-12, comprando Brasil 9 millones al año. Luego, tanto la exportación general como la destinada a Brasil se desplomaron: entre 2016 y 2020 los despachos totales se redujeron a una quinta parte, y el vecino país pasó a adquirir apenas 2 millones de este rubro al año. En turborreactores, turbinas y otras motrices, se llegaron a exportar casi 60 millones de dólares al año en 2010-2013. Brasil adquirió una cuarta parte de ese monto. Como ocurre con el resto de las producciones, la demanda cayó desde 2014 en dos terceras partes. Durante los últimos cuatro años, Brasil solo adquirió por un valor de 2,6 millones de dólares (un 10% de las exportaciones argentinas en este segmento).

Lo mismo ocurre en la industria del papel. En el período 2003-2011 se exportaron 160 millones de dólares de papel para envases y de tipo sanitario. Brasil contribuyó con casi un quinto de la demanda. Pero de ahí en más, las ventas cayeron sustantivamente, alrededor de los 34 millones al año. La demanda de Brasil se achicó a un millón y medio de dólares por año.

En el sector del caucho, los neumáticos aportaron 233 millones al año a la balanza exportadora argentina entre 2010 y 2011. Brasil compró, durante lo que va del siglo, las dos terceras partes de las ventas externas argentinas. Luego del pico de 2011, la demanda se redujo un 29%, lo mismo que las adquisiciones brasileñas.



Con poca inserción

Con algunas excepciones, la misma dinámica se da con varias otras actividades que omitimos en este artículo: del pico de exportaciones en 2011-13, a una caída sostenida a partir de 2013-14. Encontramos una merma significativa en la demanda del Brasil para varios rubros. Encontramos que, en algunos segmentos, esto no estaría motivado por una crisis de aquel país, sino por el reemplazo de productos argentinos por otros de distinto origen. Observamos que esto sucede en el sector automotriz, donde un porcentaje de las autopiezas de la Argentina que solía comprar Brasil son reemplazadas por el avance de mercancías chinas.

La consecuencia de esto es la profundización de la recesión económica. Se puede observar en la capacidad utilizada en la industria. De casi un 80% en 2011, pasamos a un 59,4% en 2019. En papel, de 82,4% (2016) a 71% (2019); en automotriz, que destina la mitad de su producción al exterior, se pasó de 74% (2011) a 34,6% (2019). En edición, de 83% (2011) a 58% (2019). Y así con el resto de las grandes actividades. Ante la saturación del mercado interno y los límites para exportar, la producción física se estancó o directamente retrocedió. Por ejemplo, entre 2015 y 2020, el volumen de fabricación de los bienes siderúrgicos producido se contrajo un 26%, la cantidad de vehículos cayó a la mitad, entre otros. Va de suyo que este fenómeno también contribuye al incremento del índice inflacionario.

Es necesario señalar que varias de las actividades reseñadas son parte del denominado mundo PyME. El inicio de la tendencia descendente en estas exportaciones es previo a la llegada de la administración de Cambiemos, que en todo caso aplica el golpe de gracia a muchos de estos capitales que ya habían comenzado a sufrir esta retracción.

En definitiva, la reducción de la demanda de países vecinos, como Brasil o Venezuela, no es reemplazada por otros destinos. Es decir, no se logra conquistar otras plazas. Las producciones no tradicionales, que merced a un incremento en sus exportaciones en torno al período 2009-2013 dieron la impresión de una mejora competitiva y de un cambio de comportamiento durante el supuesto “modelo productivo”, estuvieron basadas en variables coyunturales (incremento de la capacidad de compra de clientes particulares, tipo de cambio favorable, etc.) y no en ganancias genuinas, basadas una mayor competitividad. Por eso, la industria argentina no consigue abrirse paso en otros mercados y es desplazada. Al caer esta demanda externa, se acentuaron los déficits crónicos, quedando en evidencia que los capitales que operan en el país son poco competitivos a escala internacional. Si bien es necesario estudiar las particularidades de cada producción en particular, lo que expondremos en futuros artículos, es posible definir una línea de acción general. En ese aspecto, el consenso liberal propone dejar a merced de “las fuerzas del mercado” a los sectores que no pueden competir. En otras palabras, eso implicaría la quiebra en masa de varias actividades y un aumento brutal de la desocupación. Es necesario pensar una salida que aproveche la estructura instalada. Una salida posible, bajo otras condiciones sociales, es el establecimiento de empresas mixtas, con participación estatal y privada, bajo la dirección planificada del primero, que por un lado permita eliminar subsidios a empresarios ineficientes y por otro concentrar y centralizar medios productivos para reducir costos de logística y de insumos, ampliar la escala productiva y de empleo, y de esa manera reducir la inflación de manera real y potenciar exportaciones. Es necesario empezar a discutir una Vía Socialista.

¿Qué hacemos con la producción de aluminio?



Gonzalo Sanz Cerbino
Via Socialista

La burguesía planera es el gran lastre que hunde al país. Y no hablamos solo de pymes que sobreviven en el mercado interno a fuerza de subsidios. Es también el caso de Aluar, la única productora de aluminio primario en la Argentina, que exporta más del 70% de su producción. Detrás de esta historia de “éxitos” se encuentra la sombra del Estado argentino, al que los empresarios locales no se cansan de condenar en público, mientras lo parasitan en privado.



Una industria exitosa

Aluar es, desde varios puntos de vista, una empresa exitosa. Con una capacidad de producción de 460.000 toneladas anuales de aluminio primario, su planta de Puerto Madryn se encuentra en el primer quintil mundial en cuanto a capacidad productiva. Además de abastecer por completo al mercado local, Aluar exporta, en promedio, el 70% de su producción, teniendo a Japón y Estados Unidos como sus principales destinos y generando alrededor de 550 millones de dólares en divisas por año. Esto constituyó, en la última década, entre el 0,89 y el 1,53% de todas las exportaciones de la Argentina en un año. Con ello, Aluar mantuvo históricamente el 1% de la producción mundial de aluminio primario, aunque ese porcentaje ha descendido en la última década alcanzando el 0,73% en 2019. El éxito de Aluar es, ante todo, de su dueño, Javier Madanes Quintanilla, que según la revista Forbes posee un patrimonio de 590 millones de dólares, que lo ubican en el puesto 18 entre las principales fortunas argentinas.

La posición alcanzada por Aluar se consiguió a fuerza de inversiones. La planta, construida a principios de los '70, se proyectó para producir unas 140.000 toneladas de aluminio por año, pero ya para los '80 las inversiones realizadas permitieron elevar su capacidad productiva a 170.000 toneladas. A fines de los '90 una ampliación de la planta permitió elevar esa capacidad a 270.000 toneladas anuales y con una importante inversión realizada en 2009 esta alcanzó las 460.000 toneladas. Con cada salto en su escala mejoró notablemente su productividad, lo que le permitió mantener su lugar en el mercado mundial. A su vez, desde los '80, Aluar comenzó a ganar peso en el mercado de semielaborados y terminados, adquiriendo las plantas locales de sus principales competidoras. En 1983 compró Kicsa, antigua planta de Kaiser. En 1992 conformó C&K, al fusionar Kicsa con Camea (de la multinacional Alcan), su principal competidora a nivel local. Cuatro años después, adquirió el 51% del paquete accionario de C&K. La empresa se transformó en la División Elaborados de Aluar. En 1998, finalmente, compró Refinerías Metales Uboldi, pasando a controlar de esa manera la producción local de productos elaborados y semielaborados de aluminio.

Aún así, Aluar está lejos de alcanzar a los líderes mundiales. Su producción representa poco más del 1% de la de China, que encabeza el podio con 37 millones de toneladas por año, y apenas supera el 10% de la de Rusia e India, que con 3,6 millones de toneladas cada uno, siguen a China en el ranking. A nivel de planta, aunque de tamaño considerable, el establecimiento de Aluar en Puerto Madryn está lejos de alcanzar la capacidad productiva de sus pares en China, India o Rusia, donde varios establecimientos superan el millón de toneladas anuales. A su vez, aunque a nivel individual la única planta de aluminio primario de Aluar (y de Argentina) supera en capacidad productiva a cualquiera de las plantas de Alcoa, una de las empresas líderes en el mundo, la capacidad de todas las plantas de esta empresa sumadas multiplica por 10 la de Aluar. En términos de productividad, ciertos cálculos ubican a Aluar por encima de algunos de sus principales competidores en el mundo, como Rusal y China Hongquiao. En relación a los costos Aluar equipara a Rusal, pero está muy por detrás de la productora china. Es por esta razón que solo cuando el precio del aluminio se encuentra alto en el mercado mundial, los costos de Aluar están por debajo del precio internacional y cuando no, la empresa pierde competitividad. Por eso, sufre oscilaciones en su tasa de ganancia e incluso años con pérdidas.

•A la sombra del Estado...

Las posiciones alcanzadas por Aluar, sin embargo, no hubieran sido posibles sin la permanente asistencia del Estado argentino, que la empresa recibió desde sus orígenes. Entre las ayudas recibidas por Aluar se destaca, en primer lugar, la inversión estatal que hizo posible su instalación. La familia Madanes, dueña en ese momento de la fábrica de neumáticos Fate, se adjudicó en 1971 la licitación de un proyecto de inversión público-privado para la instalación de la planta de aluminio en Puerto Madryn. El Estado asumió la construcción de dos obras de infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento de Aluar: la construcción de un puerto de aguas profundas, necesario para importar la materia prima (bauxita) y la represa hidroeléctrica Futaleufú, que proveería a la planta de energía eléctrica, el principal insumo para la producción de aluminio. A su vez, la provincia de Chubut vendió a Aluar las tierras donde se instalaría la planta y las viviendas del personal a una milésima parte de su valor. La adjudicación del proyecto no estuvo exenta de escándalos. Los Madanes ganaron la licitación gracias a los oficios de José Ber Gelbard, accionista minoritario de Fate, máximo dirigente de la Confederación General Empresaria (CGE) y futuro ministro de economía de Perón. Congraciarse con el dirigente empresario peronista resultaba prioritario para el entonces presidente de facto Alejandro Lanusse, que contó con su apoyo para negociar el retorno de Perón al país. El escándalo por la adjudicación irregular de Aluar continuó durante años. La Comisión Investigadora Bicameral creada en 1974 determinó la presencia de múltiples irregularidades aunque no llegaron a una conclusión unánime: mientras los senadores propusieron la expropiación de las acciones de Aluar, Diputados propuso su intervención. La decisión quedó en manos de la última dictadura, que intervino la empresa si cuestionar la propiedad de los Madanes.

Pero la cosa no quedó ahí. Cada inversión importante realizada por Aluar desde ese momento contó con un significativo apoyo estatal. Las inversiones realizadas durante los '80 se hicieron gracias a los créditos subsidiados y los avales del Banco Nacional de Desarrollo. Y eso, sin contar los beneficios de la estatización de deudas durante la última dictadura. A su vez, Aluar pudo adquirir dos activos clave durante las privatizaciones en los '90, pagados en buena medida con títulos de la deuda argentina devaluados: Futaleufú y las líneas de alta tensión que unían la represa con Puerto Madryn. La posibilidad de elevar la producción dependía de garantizar un mayor abasto de energía eléctrica. Por eso, Aluar comenzó a demandar del Estado (y consiguió) la interconexión de sistema eléctrico patagónico con el nacional. Dicha obra se anunció en 2001, y sería financiada en un 80% por el Estado y en un 20% por Aluar, aunque la empresa sería la principal beneficiaria. Finalizada la obra de interconexión, Aluar pudo avanzar con la ampliación que finalizó en 2009. Esta nueva inversión también contó con subsidios estatales: un tercio del proyecto fue financiado por el Estado, que puso 690 millones de pesos en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones de Lavagna de 2005. Solo ese proyecto consumió el 62% de los fondos asignados por el gobierno a financiar el programa. La ley fue hecha a medida de Aluar. Más recientemente, Aluar aprovechó los beneficios que brindaba el Estado para la instalación de parques eólicos, con el objetivo de aumentar su capacidad de autoabastecimiento energético. Pero el Estado no solo se pone cuando Aluar realiza inversiones, también cuando hay que afrontar gastos excepcionales, que debería pagar la empresa. En enero de 2021, desembolsó 300 millones de pesos y proporcionó asistencia financiera (a muy largo plazo y bajo interés) por 1.000 millones para que Transpa, la empresa de los Madanes que administra las líneas de alta tensión que interconectan Futaleufú, reponga las torres caídas durante una tormenta en el invierno anterior.

Como se observa, prácticamente no existen en la historia de Aluar inversiones de magnitud que no hayan sido financiadas, en parte o en su totalidad, por el Estado argentino. Pero no es este el único beneficio que la empresa recibió. El contrato de 1971 estipulaba también que Aluar no pagaría o tendría exenciones en el impuesto a las ganancias, a los sellos e IVA, entre otros. Tuvo facilidades y eximición de aranceles para la importación de equipos, materias primas e insumos (en los '70 y '80, gracias al contrato original y, posteriormente, gracias a otras leyes). También recibió un subsidio a sus exportaciones del 10%, más 10% adicional gracias al Régimen de Reembolso a las Exportaciones Patagónicas, que estuvo vigente en los '80 y '90, más el 5% adicional por exportar a "nuevos mercados". A partir de 1986, también se benefició del régimen de devolución de impuestos a las exportaciones manufactureras. En general, siempre mantuvo algún tipo de subsidio a las exportaciones, y solo cuando alguna devaluación importante los benefició significativamente (como en 2018) tuvieron que pagar retenciones.

También accedió jugosos contratos con el Estado, como las 12.000 toneladas de conductores vendidos para la construcción de la represa de Salto Grande en 1977 o la provisión de insumos para líneas de transmisión en 1978, que le permitieron compensar la caída de ventas en el mercado interno en momentos de recesión. Y contó, además, con protección aduanera para los productos que fabricaba, lo que le permitió durante muchos años vender internamente a un precio superior al internacional. Gracias a esa protección, que no se terminó con el menemismo, a fines de los '90 pudo ahogar a su competencia en el mercado de elaborados y semielaborados. Manteniendo altos los precios del aluminio primario (que sus competidores debían pagar porque, merced a los derechos aduaneros, importar era más caro) y bajos los de semielaborados y terminados, fue desplazando a la competencia, hasta que terminó comprando sus empresas. Esa protección se mantiene aún hoy, bajo otras formas, como la aplicación de [barreras antidumping](#) para resguardar su mercado del aluminio chino.

Electricidad regalada

Así y todo, aún falta hablar del principal subsidio que recibe Aluar: el precio de la electricidad. La producción de aluminio primario es una actividad electrointensiva. La electricidad es su principal insumo (seguido por la bauxita, de la que se extrae la alúmina, que se importa), constituyendo el 30% de los costos. Aluar consume tanta energía como la ciudad de Córdoba, de ahí la importancia que tuvo la construcción de Futaleufú. Con la adjudicación inicial, el Estado firmó un contrato para la provisión de energía eléctrica desde Futaleufú a un precio subsidiado, por el que Aluar pagaba un 57% del precio promedio a otros usuarios. Este contrato tenía vigencia por 20 años, pero desde su vencimiento en 1991 fue prorrogado hasta que Futaleufú fue comprada por Aluar. Hacia fines de los '90, en la medida en que la producción se ampliaba y la demanda de energía eléctrica crecía, volvió a aparecer el Estado: primero con un contrato para la provisión de gas a través de YPF (todavía una empresa estatal), para alimentar las nuevas turbinas que incorporó Futaleufú; y luego financiando la interconexión con el sistema eléctrico nacional. Pero desde la interconexión se inició un conflicto que aún perdura, ya que el sistema nacional tiene costos mayores que Futaleufú (porque los distintos sistemas de producción de electricidad tienen costos distintos), que Aluar se niega a pagar. Pretenden beneficiarse de las ventajas de estar enganchados al sistema nacional sin pagar sus costos. Esto es la posibilidad de disponer de la energía necesaria para ampliar la producción, de tener una reserva de energía o incluso de vender el excedente, algo que Aluar supo aprovechar en pandemia frente a la paralización de la producción.

El conflicto no emergió mientras distintos gobiernos mantuvieron las tarifas atrasadas: la electricidad era barata para todos, también para Aluar. Pero en los momentos de ajuste de tarifas, aparece el llanto de la burguesía planera, que siempre termina consiguiendo mantener el subsidio. Ya en 2006, el gobierno creó la figura del Gran Usuario Interrumpible, que le permitió a Aluar quedar eximida de pagar los sobrecostos derivados de la interconexión. En 2013, Aluar llegó a un nuevo acuerdo con el gobierno para seguir eximida del pago de los sobrecostos, a cambio de reducir su consumo de gas. En 2016, cuando Macri dispuso un aumento de la tarifa eléctrica, Aluar negoció con la Secretaría de Energía un trato preferencial. Se creó así la figura de los “usuarios ultra-electrointensivos”, creada nuevamente a medida de Aluar, que es prácticamente la única empresa que entra en ese régimen. De esa manera Aluar mantuvo tarifas en torno a los 17 o 18 u\$s por megawatt/hora (MWh), superiores a los 11 a 15 u\$s que pagó durante el período anterior, pero muy por debajo del costo marginal de la energía que, según el período, se ubicó entre los 40 y los 59 u\$s por MWh. La resolución que establecía la tarifa subsidiada para industrias ultra-electrointensivas tenía fecha de vencimiento, lo que no impidió que fuera prorrogada en 2018 y 2019. Finalmente, en octubre de 2021, ya con nuevo gobierno, Aluar consiguió un nuevo acuerdo para mantener congelada su tarifa energética, esta vez a cambio de “aumentar su producción”, lo que iba a hacer de todos modos pasada la pandemia.

He aquí el secreto de la competitividad de Aluar: hace 50 años que pagan por su principal insumo, que es provisto por el Estado, un tercio de su valor. Aluar ha pagado, desde que inició operaciones, entre 11 y 18 u\$s por MWh, cuando el costo de la energía en la Argentina se ubicó entre los 40 y 59 u\$s. Eso le permitió tener una ventaja frente a sus competidores, ya que como los propios directivos de Aluar reconocen, el costo promedio de la energía para la producción de aluminio primario en el mundo se ubica en torno a los 28 u\$s por MWh.

¿Qué hacemos con Aluar?

Como venimos señalando [en El Aromo](#), el gran problema de la Argentina [es la burguesía planera](#). Empresarios parásitos que sobreviven en el mercado interno a fuerza de subsidios, [dilatando recursos públicos](#). Pero no todos los parásitos tiene el mismo perfil: algunas empresas, [como Techint](#), luego de hacer base en Argentina se lanzan a competir en el mundo. Es el caso de Aluar, una empresa exitosa a costa del Estado. O sea, del aporte de los trabajadores. Tiene costos que le permiten exportar y genera anualmente más de 500 millones en divisas. Pero ese éxito no es de los empresarios que la administran, sino del Estado argentino, que financió el grueso de sus inversiones y hace 50 años que subsidia su principal insumo.

Así y todo, Aluar no es una empresa estatal. Ni siquiera una empresa mixta. Es una empresa privada, que ha convertido a su dueño en millonario. El Estado ha invertido millones en Aluar, que no han retornado de ninguna manera, porque no nos han proporcionado un insumo más barato, han pasado buena parte de sus 50 años de existencia eximidos de pagar impuestos e incluso, hasta les pagamos por exportar.

Como [propone Vía Socialista](#), la Argentina debe dejar de subsidiar empresarios parásitos. Eso incluye a Aluar. Y si no pueden sobrevivir sin subsidios, el Estado se hará cargo de la producción: de esa manera haremos nuestra, finalmente, la riqueza social invertida durante medio siglo para sostener Aluar. De la mano del Estado, en el marco de un programa de desarrollo socialista y gracias a la planificación centralizada, Aluar puede convertirse en una empresa insignia. Su principal problema hoy día, la reducida escala, puede superarse de esa manera, permitiendo dar un nuevo salto en su productividad que la ponga al nivel de los grandes jugadores en el mercado mundial del aluminio.

Notas:

Rougier, op. cit.; Página/12, 31/8/02 (<https://bit.ly/3Vc8OCp>) y 11/12/05 (<https://bit.ly/3I3Acj0>); Portal Energía y Transporte, 9/1/21 (<https://bit.ly/3ValfO8>).

Rougier, op. cit.; Página/12, 31/8/02.

Rougier, op. cit.; iProfesional, 9/3/20 (<https://bit.ly/3vce8eK>).

Doncel, op. cit.; Rougier, op. cit.; www.argentina.gob.ar, 13/10/21 (<https://bit.ly/3PP7B2T>).

Doncel, op. cit.

Por una política socialista

Ellen Meiksins Wood (1942-2016)

Así y todo, la crítica del capitalismo está pasada de moda. El triunfalismo capitalista de la derecha se refleja en la izquierda con una severa contracción de las aspiraciones socialistas. Los intelectuales de izquierda, si no aclaman el capitalismo como el mejor de los mundos posibles, esperan poco más que un espacio en sus intersticios y se limitan a anhelar solo resistencias muy locales y particulares. En el momento mismo en el que se requiere con mayor urgencia el conocimiento crítico del sistema capitalista, amplios sectores de la izquierda intelectual, en lugar de desarrollar, enriquecer y refinar los instrumentos conceptuales requeridos, los rechazan por entero. El “posmarxismo” ha dejado el paso al culto del posmodernismo, con sus principios de contingencia, fragmentación y heterogeneidad, su hostilidad a toda noción de totalidad, sistema, estructura, proceso y “grandes narrativas”. Pero si bien esa hostilidad se hace extensiva a la idea misma del capitalismo como sistema social, no impide que estas corrientes traten “el mercado” como si fuera una ley de la naturaleza universal e inexorable mientras que cancelan, paradójicamente, el acceso crítico a este poder totalizador negando su unidad sistémica e insistiendo en la imposibilidad de los conocimientos “totalizadores”. La fragmentación y la contingencia posmodernas forman una extraña alianza con la última “gran narrativa”, el “fin de la historia”.

Los intelectuales de la izquierda, entonces, han tratado de definir nuevas formas, aparte de la controversia, para relacionarse con el capitalismo. El modo típico, en el mejor de los casos, es buscar los intersticios del capitalismo, dar cabida allí a “discursos”, actividades e identidades alternativas. Se destaca la naturaleza fragmentaria del capitalismo avanzado [...] y se supone que esto multiplica los espacios en los que puede operar una cultura de la izquierda. Pero subyacente a todo lo anterior parece estar la convicción de que el capitalismo llegó para quedarse, por lo menos desde cualquier perspectiva histórica previsible.

La reformulación de la relación de la izquierda con el capitalismo, haciéndose un espacio dentro de él, más que por medio de un desafío directo y una controversia, ayuda, entre otras cosas, a explicar el gran paso en los discursos tradicionales de la izquierda, de la economía política y la historia, a los más actuales y de moda: el estudio del discurso, del texto y de lo que podría llamarse la cultura de la “identidad”. Si la economía política y la historia marxistas tienen como objetivo desafiar al capitalismo como totalidad desde el punto estratégico de su antítesis, el socialismo, los “estudios culturales” (concebidos en la forma “posmoderna”) y otras empresas postizquierdistas se definen por la noción de que el terreno de la política está dentro y entre los fragmentos del capitalismo, en especial en el mundo académico, donde los discursos y las identidades pueden desconstruirse y proliferar sin restricciones materiales.

En un mundo fragmentado, compuesto de “sujetos descentrados”, donde los conocimientos totalizadores son imposibles e indeseables, ¿qué otra clase de política existe aparte de una radicalización intelectualizada del pluralismo liberal? ¿Qué mejor escape, en teoría, de la confrontación con el capitalismo, el sistema más totalizador que hay conocido el mundo, que el rechazo del conocimiento totalizador? ¿Qué mayor obstáculo, en la práctica, a todo lo que está más allá de las resistencias más locales y particulares a la fuerza global y totalizadora del capitalismo que el sujeto fragmentado y sin centro? ¿Qué mejor excusa para someterse a la fuerza mayor del capitalismo que la convicción de que su poder, si bien omnipresente, caree de origen sistémico, de lógica unificada, de raíces sociales identificables?

[...]

Así que la crítica del capitalismo requiere no solo adaptaciones a todas las transformaciones del sistema, sino también una crítica constantemente renovada de los instrumentos analíticos diseñados para comprenderlo.

Ahora es un lugar común que el marxismo occidental ha sido muy influido por la omisión de la conciencia revolucionaria dentro de la clase obrera y por la disociación resultante entre la práctica intelectual y cualquier movimiento político. Esto parece haber alentado a la gente a buscar no sólo programas políticos menos dependientes de la clase obrera, sino también teorías de transformación social liberadas de las restricciones y los engaños de la historia. [...] Ahora la construcción discursiva ha reemplazado a la producción material. [...]

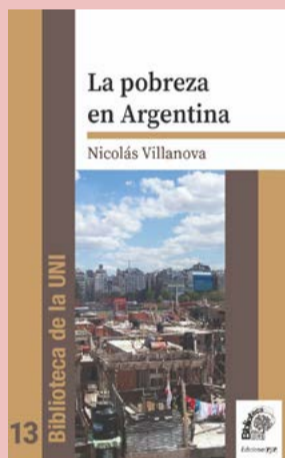
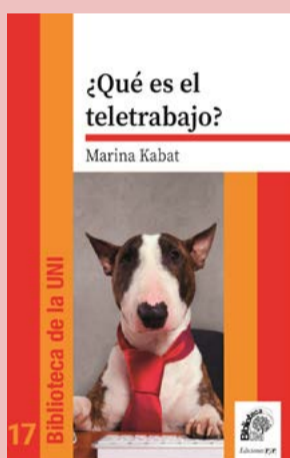
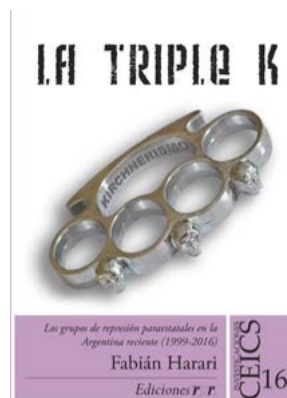
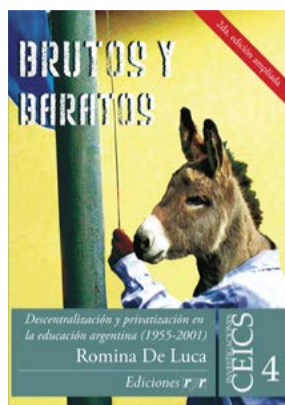
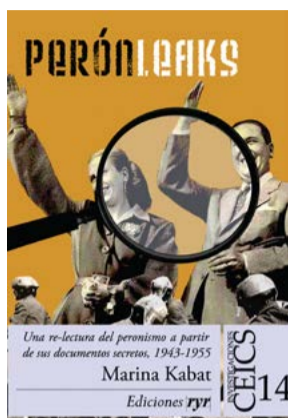
Pero la crítica original del capitalismo no podría haberse llevado a cabo sin la convicción de que hay alternativas viables, y parte del punto estratégico de la antítesis del capitalismo, el socialismo. Esto exigía una crítica, no solo del capitalismo o de la economía política, sino también de las oposiciones al capitalismo que existen hasta este momento, lo que significa someter la tradición socialista a escrutinio crítico. El propósito principal de esta crítica es transformar la idea socialista, de una aspiración ahistórica, en un programa político basado en las condiciones históricas del capitalismo.

Ediciones ryr

Accedé al catálogo completo:

<https://edicionesryr.com.ar/catalogo/>

INVESTIGACIONES CEICS



Descargá el libro con el programa de Vía Socialista

<https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR2FelKZ0u-V0Db34x8uSkMO4SsT-L9oUkUNmrjXSAWDz-TKXTneIoOeK8UQIc>



Seguinos en redes

- [f Vía Socialista](#)
- [@viasocialista](#)
- [@viasocialistaarg](#)
- [/VíaSocialista](#)